

Señor

JUEZ DEL CIRCUITO DE TUTELA (REPARTO)

E.S.M

REF. Asunto: ACCION DE TUTELA CONTRA LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE LA SEDE NACIONAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF.

Cordial saludo:

LUIS CARLOS VALLEJOS ROJAS mayor de edad e identificado como aparece al pie de mi firma en mi calidad de representante legal de la entidad educativa sin ánimo de lucro **COLEGIO MUSICAL BRITANICO** de la ciudad de Pasto / Nariño, por medio del presente escrito interpongo acción constitucional de tutela en contra de la **DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE LA SEDE NACIONAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF**, por estar vulnerando derechos fundamentales conforme a los siguientes:

HECHOS.

- 1. La institución educativa que represento actualmente se encuentra participando en la convocatoria pública CV-PC-002-2024-SEN Contrato de Aporte Contratación régimen especial (con ofertas) ICBF SEDE NACIONAL, con oferta presenta.

Aumentar el contrato

UTC-9 8:19:32

COLEGIO MUSICAL B...

procesos

Menú

Ir a

Buscar...

rtas

Volver

Últimas modificaciones

Todas

En edición

Seleccione

Buscar por ofertas

Buscar

(Búsqueda avanzada)

Últimas modificaciones

Número de oferta	Título del proceso	Tipo de proceso	Entidad Estatal	Fecha de presentación de ofertas	Fecha de presentación	Estado	Estado de la entidad contratante
CV-PC-002-2024-SEN copia	Contrato de Aporte	Contratación régimen especial (con ofertas)	ICBF SEDE NACIONAL	23 horas de tiempo transcurrido (25/04/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2 días de tiempo transcurrido (24/04/2024 8:37:51 AM(UTC-05:00) Bogotá,	Presentada	N/A

Editar

- 2. Con fundamento en el numeral 1.10 de la invitación CV-PC-002-2024-SEN, realizo solicitud de Adenda Modificatoria, en la plataforma del SECOP II.

1.10 ADENDAS MODIFICATORIAS DE LA INVITACIÓN PÚBLICA

La Entidad, de oficio o a solicitud de los interesados modificará los términos de la presente Invitación Pública, hasta el día hábil anterior al plazo previsto para el vencimiento del término y la presentación de las propuestas, únicamente mediante **ADENDAS** que se publicarán en la plataforma SECOP II.

Del mismo modo la entidad podrá modificar el cronograma del proceso con posterioridad a la diligencia de cierre; esto se hará a través de adenda que se publicará en la plataforma SECOP II. En tal evento la adenda incluirá el nuevo cronograma.

Lo anterior no impide que, dentro del plazo fijado en el cronograma del presente Proceso competitivo, los posibles interesados, si encontraren discrepancias en los documentos de la invitación pública o tuvieran dudas acerca de su significación o interpretación, puedan consultar al ICBF, mediante mensaje enviado en la plataforma SECOP II.

Por lo anterior, será responsabilidad exclusiva de los proponentes interesados mantenerse al tanto de su publicación y conocimiento.

Activar Windows

3. La motivación de la solicitud de la ADENDA se fundamentó así:

Muy respetuosamente me permito solicitar una ADENDA, donde se modifique parcialmente la NOTA 2 del FORMATO 6 – DECLARACIÓN JURAMENTADA DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN, que expresa:

“El oferente que tenga contratos suscritos y en ejecución con el ICBF durante la vigencia 2024, ya sea como proponente individual o como miembro de alguna figura asociativa, será rechazado.”

por vulnerar: los principios de igualdad, libre competencia y concurrencia en la contratación estatal, tal como lo ha previsto la corte constitucional en la sentencia de constitucionalidad C-154-23 y que me permito transcribir:

“ ...

4. La libre competencia y la igualdad en la contratación pública: se admiten distinciones objetivas y razonables

41. Por su importancia para el presente asunto, la Sala Plena profundizará en los principios de igualdad y libre concurrencia, cuya relación estrecha ha sido reconocida por la jurisprudencia constitucional^[41]. Estos le imponen límites al ámbito de configuración legislativa en relación con la contratación pública.

42. En varias oportunidades, la Corte ha analizado el alcance de los principios de libertad económica y libre concurrencia o competencia en materia de contratación estatal. En relación con estos, el tribunal ha establecido las siguientes subreglas (*tabla 1*).

<i>Tabla 1. Subreglas aplicables a los principios de libre competencia, libre competencia y libertad económica</i>	
1. Se prohíben las barreras de acceso desproporcionadas	El principio de libre competencia es, a su vez, una manifestación de los principios constitucionales de libre competencia e igualdad. Aquel permite que, según la información disponible, cualquier interesado con posibilidad de presentar una buena oferta pueda participar en el respectivo proceso de selección ^[42] .
2. No es un derecho absoluto	La libertad económica no es un derecho absoluto. El Estado puede intervenir para garantizar los principios de la función administrativa en la contratación pública ^[43] .
3. Se permiten excepciones legítimas	La libre competencia admite excepciones que pueden tener como fundamento la necesidad de asegurar la capacidad legal, la idoneidad moral o las calidades técnicas, profesionales, económicas y financieras del contratista ^[44] .
4. Restricciones serias y objetivas	Las limitaciones a la libre competencia deben establecerse con sujeción a parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, dentro del ámbito de regulación propio de la actividad que va a ser objeto de contratación ^[45] . En algunos casos, también se ha exigido que estas restricciones sean serias ^[46] y objetivas ^[47] .
5. No discriminación	La libre competencia implica un mandato de abstención de discriminación en el acceso y la participación dentro del proceso de selección. Además, posibilita la competencia y oposición entre los interesados en la contratación ^[48] .

43. A su turno, el *principio de igualdad* en la contratación estatal tiene varias manifestaciones. De una parte, este exige dispensar un tratamiento idéntico a quienes se encuentran en las mismas condiciones; de modo que se les otorguen las mismas oportunidades en función de sus características, acciones y propuestas^[49]. De otra, le impone al legislador el deber de establecer procedimientos o mecanismos que le permitan a la administración seleccionar, en forma objetiva y libre, a quien haya hecho

la oferta más favorable. Esto implica la fijación de reglas generales e impersonales que presidan la evaluación de las propuestas y la proscripción de cláusulas subjetivas que reflejen motivaciones de afecto o interés hacia cualquier proponente^[50].

44. Por supuesto, el legislador puede establecer distinciones relevantes de trato entre los proponentes, siempre que se basen en parámetros objetivos. Por ejemplo, está facultado para determinar un trato diferenciado en función del tipo de contrato^[51], la posición contractual^[52] o la situación respecto del contrato^[53]. Además, se pueden establecer diferencias para garantizar la libre competencia económica y la igualdad de oportunidades en función de las condiciones objetivas de cada oferente^[54].

45. En efecto, este tribunal ha analizado varias distinciones impuestas por el legislador en el marco de la contratación estatal bajo el baremo del principio de la igualdad en la libre competencia. La Corte ha reconocido que las medidas que confieren tratos diferentes resultan proporcionadas y no son contrarias ni a la igualdad ni a la libre concurrencia cuando se basan en factores objetivos relevantes.

46. Por ejemplo, en la Sentencia C-384 de 2003, la Corte estimó que el Congreso puede obligar a los proveedores a registrar los precios de los bienes y servicios que están en capacidad de ofrecerle tanto a la administración como a los particulares. Allí se indicó que esa medida no vulneraba el derecho a la libre competencia porque esta no es un derecho absoluto. De este modo, el Estado puede intervenir ese *mercado* para garantizar los principios constitucionales que orientan la contratación^[55]. En ese mismo sentido, el Consejo de Estado ha sostenido que:

“(…) si bien la libre concurrencia o participación de los interesados en ofrecer los bienes y servicios que se pretenden contratar se instituye como postulado del proceso de selección, como contrapartida la entidad pública respectiva puede exigir el cumplimiento de ciertos presupuestos. Esta facultad implica que el principio de libre concurrencia no es de carácter absoluto sino relativo, toda vez que el ordenamiento jurídico en aras del interés público le impone ciertas limitaciones por mandato legal o constitucional”^[56].

47. En la Sentencia C-713 de 2009, este tribunal estudió si resultaba contrario a la libre competencia que la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia y la fortaleza financiera de los proponentes fueran considerados como requisitos habilitantes y no otorgaran un puntaje en la evaluación de las ofertas. En esa oportunidad, la Corte declaró exequible esa medida y estableció que solo se impacta la libre competencia cuando se imponen “condiciones restrictivas que impidan el acceso al procedimiento de selección”^[47]. Además, reiteró que “la libertad de concurrencia admite excepciones fijadas por el legislador, con sujeción a parámetros de razonabilidad y proporcionalidad”^[48].

48. En la Sentencia C-618 de 2012 esta Corporación evaluó la constitucionalidad de una norma que les imponía una inhabilidad a los contratistas estatales y a sus familiares para realizar interventorías con las mismas entidades que los habían contratado. El tribunal mantuvo que: “cuando el legislador ha pretendido desarrollar el estatuto contractual que hace parte de uno de los componentes esenciales de la función pública, sometida estrictamente a lo que dispone la Constitución y la ley, no estaría invadiendo el ámbito de la esfera privada a que aluden los artículos 333 y 334 constitucionales”^[49].

49. Los anteriores elementos son relevantes para el juicio de constitucionalidad. Por una parte, la amplia competencia del Congreso para regular la contratación y, en concreto, la selección de los contratistas. En segundo lugar, la existencia de límites generales y específicos dentro de los que se encuentran la igualdad y la libre concurrencia. Asimismo, la extensa facultad de intervención legislativa mediante tratos diferenciados que se basen en criterios objetivos de manera que no discriminen entre proponentes por condiciones basadas en el afecto o el interés sino en hechos, circunstancias o atributos relevantes de cada oferente. Con esas premisas decisorias, la Corte le aplicará el juicio de igualdad al párrafo primero del artículo 58 de la Ley 2195 de 2022.

^[41] Sentencia C-300 de 2012 y C-815 de 2001.

^[42] Sentencia C-300 de 2012.

^[43] Sentencia C-384 de 2003.

^[44] Sentencia C-815 de 2001.

^[45] Sentencias C-618 de 2012, C-595 de 2014, C-713 de 2009, C-949 de 2001, C-815 de 2001 y C-415 de 1994.

^[46] Sentencia C-415 de 1994.

- [47] Sentencia C-949 de 2001.
[48] Sentencia C-713 de 2009.
[49] Sentencia C-887 de 2002.
[50] Sentencia C-887 de 2002.
[51] Sentencia C-1514 de 2000.
[52] Ibidem.
[53] Sentencia C-595 de 2014.
[54] Sentencia C-815 de 2001.
[55] Sentencia C-384 de 2003.
[56] Consejo de Estado. Sección Tercera (Subsección A). Sentencia del 3 de diciembre de 2007. Rad. 1100-10-326-000-2003-000-14-01 (24.715) AC.
[57] Sentencia C-713 de 2019.
[58] Sentencia C-713 de 2019.
[59] Sentencia C-618 de 2012.

...”

Finalmente debo expresar que, dentro de la reglas y limitaciones a los principios descrito por la Corte Constitucional, esta Corte no impone como excepciones a estos postulados, que el oferente tenga contratos en ejecución con la entidad convocante, porque tal declaración sería un acto discriminatorio y más aún si el oferente tiene capacidad económica residual para ejecutar posibles contratos y por ende postularse.

Adicionalmente esta NOTA 2, contenida en el formato 6, CONTRAVIENE el contenido de la invitación y la razón de existencia de dicho formato en el presente proceso contractual, teniendo en cuenta que el mismo (formato 6) surge para determinar la capacidad residual del oferente BAJO DECLARACION JURAMENTADA DE CONTRATOS EN EJECUCION y no para realizar actos discriminatorios vulnerando los principios contractuales arriba mencionados. (ver página 32 y ss de la invitación definitiva).

Con fundamento en lo anterior, solicito:

Eliminar mediante ADENDA la NOTA 2 contenida en el formato seis (6) por vulnerar los principios arriba descritos.

Como consecuencia de lo anterior ampliar el plazo para la presentación de ofertas.

4. Ante la solicitud elevada, la **DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN** el día 25 de abril del año en curso NIEGA la solicitud de la ADENDA en los siguientes términos, en la plataforma del SECOP II:

149	
Empresa	COLEGIO MUSICAL BRITANICO
Fecha	CO1.MSG.6064384 y 4/24/2024 6:40:27 AM

“....”

RESPUESTA 3:

Se aclara al observante que la nota 2 del formato 6 hace referencia a los contratos suscritos con primera infancia, en concordancia con lo establecido en el literal e del numeral 1.18 **CAUSALES DE RECHAZO CON RELACIÓN A LAS OFERTAS** de la invitación pública definitiva en el señala que: **CUANDO EL OFERENTE TENGA CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ICBF Y EN EJECUCIÓN A LA FECHA DE CIERRE DEL ACTUAL PROCESO COMPETITIVO CORRESPONDIENTES A PRIMERA INFANCIA, Y A SEA COMO PROPONENTE INDIVIDUAL, PLURAL O COMO MIEMBRO DE ALGUNA FIGURA ASOCIATIVA.**

La razón por la cual el ICBF ha dispuesto NO celebrar contratación directa con entidades con las cuales se tenga contrato de aporte vigente para la atención de otras modalidades responde a un criterio técnico que pretende evitar la concentración en materia contractual y presupuestal y de esta manera distribuir de forma adecuada el recurso público destinado a la implementación del servicio de bienestar familiar y a su turno, el riesgo derivado de la no ejecución o el incumplimiento en materia contractual.

Por otra parte, se hace relevante tener en cuenta que, el objeto del presente contrato va dirigido a adolescencia y juventud, apuntando al fortalecimiento de las capacidades de los adolescentes y jóvenes, para crear permanentemente entornos protectores frente a las diferentes vulneraciones presentes en contextos caracterizados por situaciones estructurales que agudizan la presencia de riesgos. En este sentido, estos programas y estrategias buscan también fortalecer las capacidades de las familias, las comunidades y las instituciones, a fin de generar un relacionamiento corresponsable en la promoción de mecanismos de protección integral para los Adolescentes y jóvenes, a diferencia de los programas dirigidos a primera infancia.

En este sentido, si un proponente ya sea singular, plural o como miembro de una figura asociativa, tiene contratos en ejecución con el ICBF a la fecha de cierre del actual proceso competitivo CORRESPONDIENTES A PRIMERA INFANCIA, no podrá ser seleccionado para la ejecución de nuevos contratos de aporte y su propuesta será RECHAZADA.

La exigencia de la entidad respecto a esta causal de rechazo se fundamenta en garantizar la pluralidad de oferentes y el principio de integridad y transparencia en la competencia, con

el fin de evitar la concentración del presupuesto de la entidad estatal en los mismos contratistas.

Lo anterior, sólo se logra honrando los principios de igualdad, libre concurrencia, imparcialidad, buena fe, transparencia, economía y responsabilidad; para que todos aquellos interesados en igualdad de oportunidades presenten ofertas para contratar con el Estado, lo que conlleva, a que la entidad establezca reglas y procedimientos claros y justos que permitan la mejor escogencia del contratista con arreglo a las necesidades públicas y el interés general.

Es importante resaltar que el principio de libre concurrencia, se manifiesta en la igualdad de oportunidades para quienes participan en un proceso de selección contractual y en la competencia que se pueda dar en el mismo, lo que sin duda beneficiará a la Administración, pues la libre concurrencia plural de interesados al mercado, busca ante todo **determinar los procesos de contratación pública bajo senderos de competencia real con el fin de obtener a través de la presencia plural de oferentes interesados interactuando, una oferta adecuada al mercado y, por lo tanto, óptima para la Administración pública contratante.**^[1]

Sobre este punto, vale la pena traer a colación el pronunciamiento del Consejo de Estado sobre el principio de libre competencia al señalar que: **“El principio de concurrencia impone así a la Administración cargas y actos de garantía en relación con la elaboración de pliegos de condiciones que permitan el acceso y participación efectiva de todos los posibles interesados y favorezcan la competencia entre los participantes, así como la presentación del mayor número de ofertas posibles.** Por tanto, proscribire la discriminación en el acceso al proceso de selección y todas aquellas exigencias que impidan la participación de los interesados en condiciones de igualdad y claridad. Se busca entonces que la Administración pueda beneficiarse, a partir de la oposición entre los interesados, de las ventajas económicas que la libre competencia aporta a la contratación estatal al momento de obtener la oferta más favorable.”^[2]

En concordancia con lo anterior, lo que busca la entidad con esta causal de rechazo es garantizar la participación de nuevos oferentes en los procesos de selección, atendiendo al deber de selección objetiva, el cual constituye uno de los principios más importantes de la contratación pública, dado que con él se persigue garantizar la elección de la oferta más favorable **para la entidad y el interés público**, mediante la aplicación de factores de escogencia precisos que incentiven la participación de oferentes.

Por último, respecto a la ampliación del plazo para presentar ofertas se informa que el cronograma ya ha sido modificado mediante adenda No. 4 dado tiempo suficiente a los oferentes para preparar sus ofertas y por tanto no se acoge su observación.

^[1] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA. Bogotá D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil trece (2013). Radicación número: 11001-03-26-000-2010-00037- 00(39005)

^[2] Consejo de Estado. Sala de Consulta Civil Consejero ponente: William Zambrano Cetina, Bogotá D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil diez (2010) Expediente: 11001-03-06-000-2009-00049-00

Con fundamento en los anteriores hechos solicito:

PRETENSIONES.

1. Se tutele los derechos fundamentales a la igualdad y libre concurrencia contractual sin barreras de acceso desproporcionadas y que se fundamentan en el artículo 13 de la constitución política de Colombia.
2. En virtud a lo anterior se suspenda el proceso de contratación en el estado que se encuentre y se modifique el cronograma ampliando por el termino de 5 días hábiles para que los interesados y excluidos puedan presentar y/o modificar ofertas, el cual se cerrará el día 25 de abril del año en curso a las 9:00 am, en el portal del SECOP II
3. Los demás derechos extra y ultra petita que considere sus Despacho.

CONCEPTO JURÍDICO DE LA VIOLACIÓN DE LAS GARANTÍAS FUNDAMENTALES QUE REQUIEREN PROTECCIÓN POR MEDIO DE LA ACCIÓN DE TUTELA.

Trayendo a colación la Sentencia de Constitucionalidad C-154-23 arriba citada dentro de la narración del hecho tercero, es claro que los principios de igualdad, libertad económica y libre concurrencia o competencia en materia de contratación estatal no son derechos absolutos y se rigen bajo unas excepciones, postulados y/o subreglas establecidos por la Corte Constitucional, que irradian la jurisprudencia del Consejo de Estado.

La discusión no radica en el fundamento jurisprudencia sino en la aplicación e interpretación que hace la **DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIÓN DEL ICBF** para fijar las reglas de juego dentro de la convocatoria pública de régimen especial CV-PC-002-2024-SEN Contrato de Aporte, tales como:

1.18 CAUSALES DE RECHAZO CON RELACIÓN A LAS OFERTAS de la invitación pública definitiva en el señala que: **CUANDO EL OFERENTE TENGA CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ICBF Y EN EJECUCIÓN A LA FECHA DE CIERRE DEL ACTUAL PROCESO COMPETITIVO CORRESPONDIENTES A PRIMERA INFANCIA, Y A SEA COMO PROPONENTE INDIVIDUAL, PLURAL O COMO MIEMBRO DE ALGUNA FIGURA ASOCIATIVA.**

NOTA 2 del FORMATO 6 de la propuesta: **DECLARACIÓN JURAMENTADA DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN**, que expresa: **“El oferente que tenga contratos suscritos y en ejecución con el ICBF durante la vigencia 2024, ya sea como proponente individual o como miembro de alguna figura asociativa, será rechazado.”**

Las anteriores disposiciones vulneran las subreglas 1, 4 y 5 establecidas por la Corte Constitucional establecidas en la sentencia C-154-23.

Tabla 1. Subreglas aplicables a los principios de libre concurrencia, libre competencia y libertad económica	
1. Se prohíben las barreras de acceso desproporcionadas	El principio de libre concurrencia es, a su vez, una manifestación de los principios constitucionales de libre competencia e igualdad. Aquel permite que, según la información disponible, cualquier interesado con posibilidad de presentar una buena oferta pueda participar en el respectivo proceso de selección ^[42] .
4. Restricciones serias y objetivas	Las limitaciones a la libre concurrencia deben establecerse con sujeción a parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, dentro del ámbito de regulación propio de la actividad que va a ser objeto de contratación ^[45] . En algunos casos, también se ha exigido que estas restricciones sean serias ^[46] y objetivas ^[47] .
5. No discriminación	La libre competencia implica un mandato de abstención de discriminación en el acceso y la participación dentro del proceso de selección. Además, posibilita la competencia y oposición entre los interesados en la contratación ^[48] .

Esta causal de rechazo prevista en los pliegos es desproporcionada y discriminatoria porque niega **“... el acceso y participación efectiva de todos los posibles interesados y favorezcan la competencia entre los participantes, así como la presentación del mayor número de ofertas posibles.”** (Consejo de Estado. Sala de Consulta Civil Consejero ponente: William Zambrano Cetina, Bogotá D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil diez (2010) Expediente: 11001-03-06-000-2009-00049-00) citada tomada de la respuesta del ICBF arriba transcrita.

Atentando contra **la entidad y el interés público**, pues no garantiza la elección de la oferta más favorable, mediante la aplicación de factores de escogencia precisos que incentiven la participación de oferentes. (ver repuesta ICBF)

Por el contrario, tal condición de rechazo se convierte en una barrera de acceso desproporcionada en el sentido de que dentro de la misma convocatoria ya se prevén excepciones legítimas con **fundamento** en la necesidad de asegurar la capacidad legal, la idoneidad moral o las calidades técnicas, profesionales, económicas y financieras del contratista, entre algunas las siguientes:

1. Puntaje preferencial de 20 punto para organizaciones comunales.
2. Exclusión de adjudicaciones y límites para las adjudicaciones de un solo oferente, donde solo se puede adjudicar un solo contrato a un oferente por zonal y excepcionalmente tres contratos a un solo oferente en diferentes zonas territoriales (diferentes departamentos) excepción que aplica, siempre y cuando el oferente se haya postulado a otra regional y en aquella región no exista oferente o existiendo no cumplan con los requisitos mínimos para la adjudicación, posibilidad que permite que el que tenga ya un contrato en virtud a la convocatoria acceda a otro.
3. Exigencia del RUP en un proceso de contratación directa.

La exigencia al oferente **de no tener contratos suscritos y en ejecución con el ICBF durante la vigencia 2024, ya sea como proponente individual o como miembro de alguna figura asociativa**, como causal de rechazado, contradice todo criterio técnico financiero exigido por ICBF en los pliegos, que tiene como finalidad que quien se postule cuente con la capacidad económica

residual y financiera para ejecutar posibles contratos con el ICBF, de acuerdo a los pliegos, con el fin de que el oferente de garantías de evitar el posible riesgo derivado de la no ejecución o el incumplimiento en materia contractual.

Ahora bien, si lo que pretende la **DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DEL ICBF** es evitar la concentración en materia contractual y presupuestal y de esta manera distribuir de forma adecuada el recurso público en un solo oferente previniendo **MONOPOLIOS DE CONTRATOS**, la prohibición no debería ser para aquellos que cuente con **UN SOLO CONTRATO**, sino con aquellos que ya tengan mínimo **DOS**.

Lo anterior es ambiguo cuando en la respuesta dada a la solicitud de la **ADENDA** realizada por el suscrito oferente, la **DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DEL ICBF** no aclara que el **RECHAZO** hace alusión a **VARIOS CONTRATOS** o solo a la existencia de **TENER UN SOLO CONTRATO**.

Numeral 1.18 CAUSALES DE RECHAZO CON RELACIÓN A LAS OFERTAS de la invitación pública definitiva en el señala que: **CUANDO EL OFERENTE TENGA CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ICBF Y EN EJECUCIÓN A LA FECHA DE CIERRE DEL ACTUAL PROCESO COMPETITIVO CORRESPONDIENTES A PRIMERA INFANCIA, Y A SEA COMO PROPONENTE INDIVIDUAL, PLURAL O COMO MIEMBRO DE ALGUNA FIGURA ASOCIATIVA.**

NOTA 2 del FORMATO 6 de la propuesta: **DECLARACIÓN JURAMENTADA DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN**, que expresa: **“El oferente que tenga contratos suscritos y en ejecución con el ICBF durante la vigencia 2024, ya sea como proponente individual o como miembro de alguna figura asociativa, será rechazado.”**

Si bien es cierto que dentro de los pliegos se hace **ALUSION** de **CONTRATOS**, advirtiendo un número plural, es decir más de dos (2), la dirección al no aclara tal observación, y por esta omisión ha incurrido en acciones discriminatorias y arbitrarias, dando a entender que se puede rechazar a todo oferente que cuente con un contrato vigente.

MEDIDA PROVISIONAL.

Solicito que mientras se resuelva la presente acción de tutela se declare la suspensión del proceso mientras se surte el trámite de la presente acción de tutela, teniendo en cuenta que al no haberse realizado la **ADENDA MODIFICATORIA** donde se aclaraba lo relacionado con una **CAUSAL DE RECHAZO**, esta acción ha generado incertidumbre para la presentación de la propuesta, teniendo en cuenta que dentro del cronograma a partir de hoy (26 de abril) inicia la apertura de ofertas.

TERCEROS VINCULADOS.

Vincúlese a la presente A la Agencia Nacional de Contratación Pública – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

A las personas que se crean con derecho a formar parte de la presente Acción de Tutela.

NOTIFICACIONES.

Al accionante en el correo electrónico: macovesa@yahoo.es

Al Accionado en el correo electrónico : Notificaciones.Judiciales@icbf.gov.co

A la Agencia Nacional de Contratación Publica – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE:
notificacionesjudiciales@colombiacompra.gov.co

A las personas que se crean con derecho a formar parte de la presente Acción de Tutela: Por medio de la página web portal de noticias importantes del ICBF y en el Portal del SECOP 2 de la convocatoria CV-PC-002-2024-SEN Contrato de Aporte.

JURAMENTO.

Manifiesto bajo juramento que no he presentado otra tutela por los mismos hechos.

Atentamente.

LUIS CARLOS VALLEJOS ROJAS

Cédula de Ciudadanía No.79462077